

RECURSOS CONTRA LOS LAUDOS ARBITRALES Y RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES CIADI

FERNANDO CANTUARIAS S.¹⁾

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Master of laws (LLM) Yale University

SUMARIO:

- I. Recursos contra los laudos arbitrales CIADI-
- II. Procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral

Hemos tratado en varias oportunidades acerca del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).¹

Una de las principales virtudes del CIADI, es que todo el proceso arbitral hasta la etapa de ejecución del laudo arbitral, se encuentra libre de la interferencia de las leyes e instancias judiciales de cualquier Estado.²

En otras palabras, cuando el arbitraje se desarrolla bajo los auspicios del CIADI, sólo serán de aplicación las normas arbitrales del CIADI, con prescindencia absoluta de la legislación arbitral y del Poder Judicial del lugar donde físicamente se lleve a cabo el proceso, como de cualquier otro Estado.³

En el presente trabajo, nos concentraremos en analizar cuáles son los recursos que proceden contra un laudo arbitral CIADI y cuál es el procedimiento de reconocimiento y ejecución de ese laudo arbitral, al amparo de lo dispuesto en la Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (en adelante, Convenio CIADI).

¹⁾ Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

¹ CANTUARIAS S., Fernando, *Condiciones para acceder al CIADI: A propósito del Caso Lucchetti*. En: Revista de Economía y Derecho, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, 2004, pp. 31-43; CANTUARIAS S., Fernando, *Los tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones y el acceso al arbitraje*. En: Revista de Economía y Derecho, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Otoño 2004, pp. 29-50; CANTUARIAS S., Fernando, *Algunos apuntes acerca del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)*. En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa, No. 56, Lima, AÑO XVIII, 2003, pp. 199-226; CANTUARIAS S., Fernando, *Necesidad de que el Perú suscriba la Convención de Washington (CIADI)*. En: Jus Et Veritas, Revista de Derecho, No. 2, Lima, 1991, pp. 14-17; y, CANTUARIAS S., Fernando y ARAMBURÚ, Manuel Diego, *El Arbitraje en el Perú: Desarrollo actual y perspectivas futuras*, Fundación M.J. Bustamante De la Fuente, Lima, 1994, pp. 484-502.

El Perú ha ratificado el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), mediante Resolución Legislativa 26210, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 de Julio de 1993. El Tratado entró en vigencia para el Perú el 08 de septiembre de 1993.

² JAN VAN DEN BERG, Albert, *Some recent problems in the practice of Enforcement under the New York and ICSID Conventions*. En: *ICSID Review-Foreign Investment Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 1987, p. 441. "The ICSID Convention (...) provides for a comprehensive, self-sufficient system of truly international arbitration in the area of investment disputes. Arbitration under this Convention is administered by the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), solely on the basis of the provisions of the Convention and the Rules and Regulations issued thereunder, excluding the application of any national arbitration law. In an ICSID arbitration, the place of arbitration is, therefore, legally irrelevant since it does not trigger the application of the national law on arbitrations of that place".

³ FELDMAN, Mark B., *The Annulment Proceedings and the Finality of ICSID Arbitral Awards*. En: *ICSID Review-Foreign Investment Law Journal*, 1987, Vol. 2, No. 1, pp. 86-87. "(...) the ICSID process is not subject to supervision by national courts. Even if it is necessary to call upon judicial authority for enforcement of an award, the court is not competent to review the award on any grounds whatsoever".

I. RECURSOS CONTRA LOS LAUDOS ARBITRALES CIADI

El artículo 53(1) del Convenio CIADI dispone expresamente que el "laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en este Convenio".⁵

El primer recurso que cabe contra el laudo arbitral y que debe presentarse dentro de los cuarenta y cinco días contados desde la fecha en que fue dictado, es el de ampliación en caso se haya omitido resolver algún punto controvertido o deba rectificarse algún error material, aritmético o similar (artículo 49(2) del Convenio CIADI).⁶

También cabe solicitar la aclaración del laudo arbitral, en caso existan dudas acerca de su sentido o alcance (artículo 50(1) del Convenio CIADI).⁷ Este es un recurso que puede presentarse en cualquier momento, condicionado a que exista una verdadera disputa entre las partes.⁸ Como este recurso no tiene plazo, en caso el Tribunal Arbitral original no pueda conocer la solicitud, se constituirá un nuevo órgano arbitral para estos efectos.⁹

Otra articulación que puede deducirse es la revisión del laudo arbitral, "fundada en el descubrimiento de algún hecho que hubiera podido influir decisivamente en el laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el Tribunal y por la parte que inste la revisión y que el descubrimiento de ésta no se deba a su propia negligencia" (artículo 51 del Convenio CIADI).¹⁰

Esta petición deberá presentarse dentro de los noventa días siguientes de descubierto el hecho y, en todo caso, dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictado el laudo arbitral. De ser posible, la solicitud deberá someterse al Tribunal Arbitral original. De lo contrario, se constituirá un nuevo órgano arbitral para estos efectos.¹¹

⁵ Leer artículos 48-49 del Convenio CIADI y reglas 47-48 de las Reglas de Arbitraje, acerca de los requisitos formales del laudo arbitral y su notificación.

⁶ PARRA, Antonio R., *The limits of party autonomy in arbitration proceedings under the ICSID Convention*. En: *ICC International Court of Arbitration Bulletin*, Vol. 10, No. 1, 1999, p. 32. "Article 53(1) of the Convention (...) provides in categorical terms that an award made pursuant to the Convention shall be binding on the parties and not subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in the Convention. The parties, therefore, cannot validly agree that the award may be appealed or otherwise proceeded against outside the confines of the Convention. Nor, on the other hand, can the parties bind themselves not to seek the remedies provided for in the Convention. The provisions of the Convention on these remedies do not offer that option".

⁷ Ver además la regla 49 de las Reglas de Arbitraje. La decisión que adopte el Tribunal Arbitral formará parte del laudo arbitral. *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement - International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.ª, p. 7. "This remedy is designed for inadvertent omissions and minor technical errors. It is not designed for a substantive review of the decision. Rather, it enables the tribunal to correct mistakes that may have occurred in the award's drafting in a simple way".

⁸ Revisar además las reglas 50 y 51 de las Reglas de Arbitraje.

⁹ *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement - International Centre for Settlement of Investment Disputes*, 2.ª. *Post-Award Remedies and Procedures*, United Nations, New York and Geneva, 2003, p. 9. "There must be a specific dispute concerning the meaning or scope of the award".

¹⁰ Como no hay límite de tiempo para plantear este recurso, su interposición o pendencia no evita la ejecución del laudo arbitral.

¹¹ Revisar además las reglas 50 y 51 de las Reglas de Arbitraje. *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement - International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.ª, p. 11. "Revision involves a substantive alteration of the original award on the basis of newly discovered facts that were unknown when the award was rendered (...) Revision is contingent upon the discovery of new facts. These must be capable of affecting the award decisively. The new element must be one of fact and not of law".

¹² Al tramitar de una solicitud que implica la afirmación de que existen hechos relevantes recién descubiertos que alterarían significativamente el contenido del laudo arbitral, se autoriza a que la parte interesada pueda pedir en su solicitud la suspensión de la ejecución del laudo arbitral y ese sólo hecho implicará la suspensión provisional hasta que el Tribunal Arbitral decida al respecto. Además, en caso las circunstancias lo exijan, los árbitros se encuentran autorizados para disponer la suspensión de la ejecución del laudo arbitral hasta que decidan sobre la revisión. Sobre el tema leer a: PARRA, Antonio R., *The limits of party autonomy in arbitration proceedings under the ICSID Convention*, Ob. Cit., pp. 29-30.

Por su parte, el artículo 52 del Convenio CIADI establece que dentro de los ciento veinte días de dictado el laudo arbitral¹⁵, cualquiera de las partes puede solicitar su anulación, en base a cinco causales taxativas.¹⁶

Las causales de anulación son las siguientes:

- (a) Que el Tribunal Arbitral se hubiere constituido incorrectamente;¹⁷
- (b) Que el Tribunal Arbitral se hubiere manifiestamente extralimitado en sus facultades;¹⁸
- (c) Que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal Arbitral;¹⁹
- (d) Que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento;²⁰
- (e) Que no consten en el laudo arbitral los motivos en que se funda.²¹

Además del reducido campo de análisis del recurso de anulación que se asemeja al existente en el ámbito privado²², una de las principales virtudes del CIADI es que el recurso de anulación

¹⁵ Si la causal invocada es la de corrupción de algún miembro del Tribunal Arbitral, los ciento veinte días comenzarán a computarse desde el descubrimiento del hecho, pero, en todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictado el laudo arbitral.

¹⁶ *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement – International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.ª, p. 13. "Annulment is different from an appeal. Appeal may result in the modification of the decision. Annulment results in the legal destruction of the original decision without replacing it. An ad hoc committee acting under the ICSID Convention may not amend or replace the award by its own decision on the merits (...) Annulment is only concerned with the basic legitimacy of the process of decision but not with its substantive correctness. Therefore, annulment is based on a very limited number of fundamental standards".

¹⁷ Esta causal resulta procedente cuando, por ejemplo, alguno de los árbitros no cumple con el requisito de nacionalidad, no cuenta con las calificaciones que exige el CIADI, o tiene algún conflicto de intereses. Sin embargo, esta causal difícilmente se presentará, gracias al sistema de designación que desarrolla el CIADI, así como a las reglas de recusación.

¹⁸ Esta causal también es aplicable cuando los árbitros se niegan a asumir jurisdicción (es decir, se declaran incompetentes) cuando en realidad la tienen. *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement – International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.ª, p. 18. "Excess of power: Failure to exercise jurisdiction where jurisdiction does, in fact, exist also constitutes an excess of power. A decision by a tribunal that states that it lacks competence is rendered in the form of an award. Such an award may be the subject of annulment proceedings".

¹⁹ Hasta donde tenemos conocimiento, nunca se ha planteado esta causal.

²⁰ *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement – International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.ª, pp. 22-23. "To be serious the departure must be substantial rather than minimal. The departure must have had a material effect on the affected party. It must have deprived that party of the benefit of the rule in question. For instance, if a party is deprived of its right to be heard, the departure is not serious if it is clear from the circumstances that the party never intended to exercise the right (...) A party must react immediately to a violation of proper procedure by stating its objection and by demanding compliance. Arbitration Rule 27 states that failure to object will be interpreted as a waiver to object at a later stage".

²¹ *Ibidem*, p. 26. "The tribunal's obligation to deal with every question submitted to it does not mean that it has to address every argument advanced by a party. Some arguments may be irrelevant, peripheral or obsolete. In order to form a basis for annulment, a question that has not been dealt with, must be an essential question in the sense that it could have affected the outcome of the award. An essential question may also be understood in the sense of a crucial or decisive argument. An argument is crucial or decisive if its acceptance would have altered the tribunal's conclusions". Sobre este particular, ver a: STURZENEGGER, Marc, *ICSID Arbitration and Annulment for Failure to State Reasons: The Decision of the Ad Hoc Committee in Maritime International Navigation Establishment v. The Republic of Guinea*. En: *Journal of International Arbitration*, Vol. 9, No. 4, 1992, pp. 173-198.

²² DAWSON, Frank Griffith, *El rol del Poder Judicial en el proceso de arbitraje: asistencia o intervención?*. En: *Ius Et Veritas, Revista de Derecho*, No. 15, Lima, 1997, pp. 207 y ss.; DELAUME, Georges R., *Reflections on the Effectiveness of International Arbitral Awards*. En: *Journal of International Arbitration*, Vol. 12, No. 1, 1995, pp. 1 y ss.; BOZA DIBÓS, Beatriz, *Reconocimiento y Ejecución en el Perú de Laudos Arbitrales Extranjeros*. En: *Temas Revista de Derecho*, No. 16, Lima, 1990, pp. 61 y ss.; y: JAN VAN DEN BERG, Albert, *New York Convention of 1958: Consolidated Commentary, Cases reported in Volume XIII(1988)-XIV(1989)*. En: *Yearbook Commercial Arbitration*, Vol. XIV, 1989, pp. 582 y ss.

se presenta ante la propia institución²⁰, la que inmediatamente designa una Comisión Ad-Hoc integrada por tres personas seleccionadas de su Panel de Árbitros que se encargarán de resolver el pedido y, si se llega a anular el laudo arbitral, la diferencia se someterá nuevamente ante otro Tribunal Arbitral CIADI, si así lo solicita una de las partes (artículo 52 del Convenio CIADI).²¹

De esta manera, y a diferencia de lo que puede suceder con los laudos arbitrales que se encuentran sujetos a una legislación nacional²², los fallos arbitrales que se emitan ante el CIADI jamás podrán ser revisados por las cortes de los Estados Miembros.²³

II. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Convenio CIADI, las partes deberán acatar y cumplir el laudo arbitral en todos sus extremos²⁴, "(...) salvo en la medida en que se suspenda su ejecución, de acuerdo con lo establecido en las correspondientes cláusulas de este Convenio".²⁵

En caso proceda la ejecución del laudo arbitral y el inversionista no acate el mandato, será de aplicación el artículo 54 del Convenio CIADI, conforme al cual todo "(...) Estado Contratante reconocerá el laudo dictado conforme a este Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratara de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho estado (...)".²⁶

²⁰ Ver reglas 50 y 52 de las Reglas de Arbitraje.

²¹ REISMAN, W. Michael, *Systems of Control in International Adjudication & Arbitration – Breakdown and Repair*, Duke University Press, 1992, p. 50. "The innovation in ICSID was the control entity to which claims for nullification were to be submitted. Once the request has been lodged, the chairman of the ICSID Administrative Council (ex officio the president of the World Bank) appoints an ad hoc committee of three persons from a panel of names proposed by states' members and kept by the secretary-general, none of whom may have the nationality of the state-party of the foreign investor. Name notwithstanding, the committee is, in effect, another tribunal, following the same proceduralities prescribed in the convention for the original tribunal, though its mandate is more circumscribed than the tribunal whose award it is reviewing. In the course of its proceedings, the committee may stay enforcement of the award. If it finds that there has been a violation of one or more of the standards, the ad hoc committee is authorized to annul the award in whole or in part. If the award is nullified by the committee, either party may submit the dispute to a new tribunal, constituted in accordance with the convention".

²² Como anulado que sea un laudo arbitral CIADI, éste no va al poder judicial sino que se constituye un nuevo tribunal arbitral CIADI que juzgará el caso, se generan así los inconvenientes correctos para evitar la interposición de recursos incesantes. Tal vez sea por esto que, como explica Frazer Kändmüller Caminelli, ICSID, "hacia el futuro" despareciera ante la atomización globalización y el fragor creciente de las controversias en materia de inversión extranjera. En: *Revista Iberoamericana de Arbitraje*, www.servicios.com.pe/arbitraje/colaboraciones/inversion.htm, p. 16, "[h]asta el año 2002 hubo solamente nueve solicitudes de anulaciones de laudos arbitrales, para un número total de 93 casos, en un período de 36 años".

²³ Obviamente, lo que se someterá a conocimiento de un nuevo Tribunal Arbitral será la precisión del laudo arbitral anulado, ya que si una parte del fallo no es anulado, la decisión será cosa juzgada. Además, conforme lo dispone el artículo 52(6) del Convenio CIADI, sólo procederá someter a conocimiento del nuevo Tribunal Arbitral la disputa original. Sobre el tema leer a: FELDMAN, Mark B., *The Arbitration Proceedings and the Finality of ICSID Arbitral Awards*, Ob. Cit., pp. 85 y ss. *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement – International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.8., pp. 11-12. Ver además las reglas 53(1) y 55(3) de las Reglas de Arbitraje.

²⁴ *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement – International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.9. *Binding Force and Enforcement*, p. 5. "ICSID awards are final. This means that once an ICSID award has been rendered, the parties may not seek a remedy on the same dispute in another forum. This res judicata effect applies in relation to other arbitration tribunals, including ICSID tribunals, as well as domestic courts".

²⁵ Conforme al artículo 52(5) del Convenio CIADI, una parte al momento de iniciar el proceso de anulación de un laudo arbitral puede solicitar la suspensión de la ejecución de dicho laudo, en cuyo caso la ejecución se suspenderá provisionalmente hasta que la Comisión Ad-Hoc se pronuncie sobre el particular. La Comisión también podrá disponer la suspensión de la ejecución del laudo arbitral durante el proceso. "[s]i (...) las circunstancias lo exigen (...)". Ver además las reglas 54(1) y 54(2) de las Reglas de Arbitraje.

²⁶ DELAUMÉ, Georges R., *Experience with ICSID*. En: AKSEN, Gerold & VON MEHREN, Robert B., *International Arbitration between Private Parties and Governments, Comparative Law and Practice Course Handbook Series*, No. 399, U.S.A., 1982, pp. 254-255. "If an investor fails to comply with an ICSID award, the Contracting State party to the dispute will find in Article 54 of the Convention effective means of enforcing the award against the investor and its property".

De esta manera, cualquier Estado que requiera ejecutar un laudo arbitral CIADI contra un inversionista podrá recurrir ante la instancia judicial de cualquiera de los Estados Miembros²⁷, con la finalidad de proceder al reconocimiento y ejecución de dicho laudo arbitral²⁸, el que deberá ser reconocido sin que proceda revisión alguna en la forma o en el fondo.²⁹

En otras palabras, como expresa Broches³⁰, "(...) todos los Estados firmantes, independientemente del hecho de que uno de sus ciudadanos sea o no parte directa en el conflicto, tienen la obligación de reconocer el carácter vinculante de un laudo dictado con arreglo al Convenio; de considerar dicho laudo, tras la simple certificación por el Secretario general del Centro, como si fuera un fallo definitivo de un tribunal del propio país, y por lo tanto de cumplirla. En contraste con los Convenios de Panamá y Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, esta obligación es absoluta (artículo 54 del Convenio).

No hay necesidad de un exequatur ni de "homologación". El laudo no es un laudo extranjero, sino (...) [que] tiene la fuerza de un fallo definitivo de un tribunal del país".³¹

(...) the great advantage of the Convention over other international conventions regarding the enforcement of foreign arbitral awards is that not even public policy can be raised as a defense to the binding character of ICSID awards. Against an investor, an ICSID award is, subject only to the formality of submitting a certified copy of the award to the recognizing court or authority, a title which is immediately executory". BROCHES, Aron, *Awards Rendered Pursuant to the ICSID Convention: Binding Force, Finality, Recognition, Enforcement, Execution*. En: *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, 1987, Vol. 2, No. 2, p. 317. "The language of the provision leaves no doubt that it obligates Contracting States to give effect in the domestic legal order to the binding and obligatory force of an award decreed by Article 53 of the Convention and to do so whether or not they or any of their nationals had been parties to the dispute. Contracting States have two obligations: to recognize an award as binding and to enforce the pecuniary obligations imposed by it. The award is equated to a final court decision for both purposes".

²⁷ Inclusive podrá acceder ante el poder judicial del Estado en el que físicamente se llevó a cabo el arbitraje, ya que para efectos del CIADI un laudo arbitral no tiene nacionalidad. *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement - International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.9., p. 9. "Their independence from national procedures for review of arbitral awards means that the place of arbitration in ICSID proceedings is irrelevant for the award's validity and enforcement. In the same vein, national courts charged with the enforcement of an ICSID award, have no power to review that award for substantive correctness or procedural irregularities".

²⁸ De conformidad con el artículo 54(3) del Convenio CIADI, la parte que solicite el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral simplemente presentará una copia del fallo debidamente certificada por el Secretario General del CIADI.

²⁹ O'NEILL, Philip D. Jr., *American Legal Developments in Commercial Arbitration Involving Foreign States and State Enterprises*. En: *Journal of International Arbitration*, 1989, Vol. 6, No. 1, p. 133. "(...) ICSID clearly has a substantial advantage over other arbitral institutions and ad hoc arbitrations in terms of recognition of its awards. Pursuant to Article 54 of the ICSID Convention, there is a simplified procedure of providing a certified copy of the ICSID award for recognition and then immediate initiation of enforcement proceedings (...). It suffices to say that no defense to the recognition of the award can be raised including sovereign immunity". TORIELLO, Pierluigi, *The Additional Facility of the International Centre for Settlement of Investment Disputes*. En: *The Italian Yearbook of International Law*, 1978-79, Vol. IV, p. 82. "The most significant aspects of the award emerge in relation to its effectiveness and enforcement within the Contracting States. All Contracting States are obliged under the Convention to recognize the award and ensure its enforcement within their municipal systems as though it constituted a judgment of one of their own courts. The award is not dependent for its effect on any measure of recognition or exequatur in the municipal system and proceeds on presentation of a certified copy of the award to the national authority which the State considers competent".

³⁰ BROCHES, Aron, *El Arbitraje de el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)*. En: *Estudios sobre Arbitraje Comercial Internacional, Centro de Estudios Comerciales (CECOI)*, 2da. Ed., Madrid, 1983, p. 246. *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement - International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.9., p. 12. "[The national court] (...) may not re-examine the ICSID tribunal's jurisdiction. It may not re-examine the award on the merits. Nor may it examine the fairness and propriety of the proceedings before the ICSID tribunal. Not even the *ordre public* (public policy) of the State where recognition and enforcement of an ICSID award is sought, is a valid ground for a refusal to recognize and enforce".

³¹ DELAUME, Georges R., *Decisions of Regional and Foreign Courts: France - recognition of ICSID awards - sovereign immunity*. En: *The American Journal International Law*, Vol. 86, 1992, p. 139. "This simple and original procedure is intended to operate in complete independence of the rules applicable to the recognition of non-ICSID (foreign or international) awards that are found in domestic legal systems or in international conventions, such as the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Unlike domestic or other conventional rules that give national courts the right to deny recognition to foreign awards on specific grounds, the Convention deprives such courts of any discretion in the matter. Under the Convention, there is no exception (not even on the ground of public policy) to the binding character of ICSID awards and to their recognition in contracting states".

Por su parte, si quien incumple es un Estado, el inversionista también podrá seguir el camino indicado en los párrafos precedentes³³, no pudiendo escudarse el Estado en cuestión en la inmunidad de jurisdicción para pretender impedir el reconocimiento del laudo arbitral.³⁴ Sin embargo, el artículo 55 del Convenio CIADI establece que los Estados Contratantes ejecutarán un fallo dictado contra un Estado de conformidad con sus disposiciones domésticas sobre inmunidad en materia de ejecución.³⁵

Esto significa que si bien las cortes de los Estados Miembros están obligadas a reconocer un laudo arbitral dictado en contra de un Estado, es posible que si en el foro se reconoce algún tipo de inmunidad en la ejecución, el laudo arbitral no pueda ejecutarse sobre todos o algunos de los bienes del Estado en falta.

Como explica Berg³⁶, esta restricción a la fuerza coercitiva de los laudos arbitrales CIADI no parecería ser congruente con la obligación internacional de las cortes de los Estados Miembros de reconocer los fallos CIADI. Sin embargo, en su autorizada opinión, esta limitación existe debido a consideraciones políticas y económicas: en términos políticos, una cosa es reconocer un fallo contra un Estado y otra muy distinta es ejecutar esa decisión contra los bienes de ese país, cuando además el laudo arbitral ha sido emitido respecto a una controversia relacionada con una inversión realizada dentro del territorio del Estado ejecutado; y, en términos económicos, de no aceptarse que cada Estado Miembro pueda aplicar sus propias normas sobre inmunidad en la ejecución, muchos países podrían trasladar sus bienes ubicados en Estados Miembros del CIADI a otros que no fueran parte de esta Convención.

Ahora bien, uno de los principales criterios, sino el más importante, utilizado por los Estados para determinar si procede la inmunidad en materia de ejecución, es el referido a la naturaleza de los bienes que se pretenden ejecutar. En efecto, generalmente se distingue entre bienes utilizados para fines comerciales y bienes aplicados a fines soberanos, procediendo la mayoría de las veces la ejecución sólo contra los primeros.³⁷

³³ Artículo 54(3) del Convenio CIADI: "El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de sentencias, existieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se pretenda".

³⁴ DELAUME, Georges R., *Decisions of Regional and Foreign Courts: France—recognition of ICSID awards—sovereign immunity*, Ob. Cit., p. 139, "At the time of recognition, the Convention prevents the state in question from raising the defense of immunity from jurisdiction. In the system of the Convention, recognition is considered as constituting the ultimate phase of the arbitral process and the state is deemed to have waived any defense, including immunity from the jurisdiction of the recognizing court, that would interfere with the ICSID system and be inconsistent with the consent given by that state to ICSID arbitration".

³⁵ Artículo 55 del Convenio CIADI: "Nada de lo dispuesto en el Artículo 54 se interpretará como derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado a de otro Estado extranjero". DELAUME, Georges R., "Experience with ICSID", Ob. Cit., p. 252. "(...) as soon as an ICSID award is recognized, it becomes a valid title on the basis of which measures of execution can be taken, e.g. in the form of attachment, provided, however, that if such measures are directed against state property, execution is possible under the law of the State in which execution is sought".

³⁶ JAN VAN DEN BERG, Albert, *Some recent problems in the practice of Enforcement under the New York and ICSID Conventions*, En: *ICSID Review—Foreign Investment Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 1987, pp. 449-450. "It is submitted that it is rather (logical) that in matters of arbitration a waiver of immunity is accepted with respect to jurisdiction but not with respect to execution. If a State agrees to arbitration, it must be deemed to have accepted all its consequences, including compliance with an unfavorable award. If in the latter case it does not carry out the award, the State's assets, like assets of a private person, should be capable of execution. In other words, waiver of immunity from jurisdiction should imply waiver of immunity from execution. This rule is nothing other than an application of the principle of *pacta sunt servanda*.

One can only surmise which are the reasons for this incongruity. The continued absolute immunity from execution is apparently based on political and economic considerations. Execution is commonly felt to be a "more intensive interference with the rights of a State". From the economic point of view, restrictive immunity principles applied to execution could result in foreign States refraining from investment in countries in which they know their property could be subject to execution".

³⁷ *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement—International Center for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.9., p. 18, "The most important criterion for State immunity from execution is the nature of the assets which are to be the object of enforcement. A distinction is made between commercial and non-commercial property. Execution is permitted against commercial property but not against property serving official or governmental purposes".

Los bienes considerados típicamente soberanos, son aquellos asignados a las funciones de una legación diplomática. Pero no cualquier bien, ya que sólo se encuentran protegidos los bienes que efectivamente se utilizan para estos fines, como ha sido expresamente reconocido por las cortes de Alemania³⁷, Francia³⁸, Bélgica³⁹, los Estados Unidos de Norteamérica⁴⁰, entre otros.⁴¹

Otros bienes generalmente considerados en la misma categoría, son la propiedad militar⁴² y a las divisas colocadas por los bancos centrales u otras autoridades monetarias.⁴³

En nuestra opinión, en ambos casos la protección de este tipo de bienes tiene poco que ver con la intención de proteger la propiedad foránea, y más con lo que Berg⁴⁴ llama interés económico, ya que si Estados como los Estados Unidos de Norteamérica no establecieran este tipo de limitación, muchos países tenderían a tomar la decisión de colocar sus excedentes monetarios en otros lugares donde estos bienes no se vieran potencialmente afectados.

En todo caso, vale la pena mencionar que no existe un criterio uniforme entre los Estados que permita determinar cuándo se está frente a bienes utilizados con fines soberanos⁴⁵, lo que

³⁷ FERNÁNDEZ MADRID, Homacio, *Juicios contra estados extranjeros. Teoría restringida de la inmunidad de jurisdicción*. En: *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, 1996, Buenos Aires, Año 1, No. 1, p. 151. "(...) resulta útil tener en cuenta un caso resuelto por el prestigioso Tribunal Constitucional Alemán el 13 de diciembre de 1997 en un asunto seguido contra la Embajada de la República de Filipinas concerniente a un contrato de alquiler. Los demandantes pretendieron dirigirse contra fondos que el Estado aludido tenía depositados en forma en el Deutsche Bank. El citado Tribunal, luego de efectuar una extensa revisión de los usos de práctica, señaló que no existe normas de Derecho Internacional que conceda inmunidad absoluta a los Estados Extranjeros frente a la ejecución forzada de su patrimonio, en ciertos casos de inmunidad de jurisdicción; indicó que ello sería así, en tanto aquél no está afectado a fines 'soberanos', en cuyo caso subsiste el privilegio indicado".

³⁸ TURCK, Nancy B., *French and US Courts Define Limits of Sovereign Immunity in Execution and Enforcement of Arbitral Awards*. En: *Arbitration International*, Vol. 7, No. 3, 2001, p. 330. "(...) on 10 August 2000, the Paris Court of Appeal held that (...) the defendant Russian Federation (...) makes an account in France in the name of the Russian Embassy that were used solely for the embassy's public service activities in France and makes an account for the permanent mission of Russia for UNESCO were protected by diplomatic immunity against execution". El caso fue seguido por *Le Gouvernement de la Fédération de Russie c. Compagnie Noga d'Importation et d'Exportation*.

³⁹ *Ibidem*, p. 332. "Article 25 of the Vienna Convention was relied on by the Brussels Court of Appeal to reach the same conclusion as the Paris Court of Appeal in *Leica AG v. Central Bank of Iraq and the State of Iraq*".

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 338-339. "The US District Court in *Birch Shipping Corporation vs. The Embassy of the United Republic of Tanzania*, held that a foreign embassy's bank account in the United States which is not used solely for commercial activity is not immune from attachment" [and] (...) the US District Court for the District of Columbia determined, based on the Vienna Convention (...) that the *Liberian Embassy's* bank accounts were immune from attachment, even if some portion of the account was used for commercial activities in operating an embassy.

⁴¹ *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement - International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.9., p. 22. "Courts have treated embassy accounts with much caution. The (...) House of Lords in the *United Kingdom* case to the conclusion that money in a diplomatic mission's bank account used for meeting the expenses of running the mission did not serve commercial purposes (...) The Austrian Supreme Court and the Italian Court of Cassation reached the same result".

⁴² *Ibidem*, pp. 22-23. "Military property of foreign States also enjoys immunity and is given special protection from execution under most of the national laws dealing with State immunity. This applies for the *United States FSIA*, the *Canadian State Immunity Act* and the *Australian Foreign States Immunities Act*".

⁴³ *Ibidem*, p. 23. "Most of the national statutes dealing with State immunity provide special protection for central banks and other monetary authorities and their property. The *United States FSIA* grants immunity from attachment and execution to property belonging to a foreign central bank or monetary authority held for its own account. The phrase 'held for its own account' relates to the distinction between funds held in connection with genuine central bank activities and those used to finance commercial transactions. The *Canadian Act*, the *United Kingdom Act* and the *Australian Act* contain provisions to the same effect".

⁴⁴ Ver *supra* cita No. 35.

⁴⁵ *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement - International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.9., p. 18. "But the exact difference between the two types of property is not always clear".

obligará a analizar la situación caso por caso.⁴⁶

Es más, inclusive cuando un bien es considerado comercial, muchas veces se requiere verificar además el cumplimiento de requisitos particulares de cada Estado, como el que exigía la *Foreign Sovereign Immunities Act* (FSIA) norteamericana antes de su modificación de 1988, acerca de que debía existir un nexo entre el bien que se pretendía ejecutar y la pretensión reconocida.⁴⁷ Si bien este requisito ha sido eliminado en 1988⁴⁸, se mantiene como condición en muchos otros países.

Si bien la inmunidad en materia de ejecución puede ser considerada como un tema que la Convención del CIADI no resuelve de manera satisfactoria⁴⁹, como explica Broches⁵⁰ la negativa de un Estado a cumplir voluntariamente con lo resuelto en su contra lo expondrá a dos sanciones reconocidas dentro de este Tratado: la primera, de conformidad con el artículo 27(1) del Convenio CIADI, el Estado del cual el inversionista es su nacional podrá válidamente conceder protección

⁴⁶ Algunas veces este problema se puede solucionar simplemente pidiendo en el convenio arbitral la renuncia a la inmunidad en la ejecución. DELAUME, Georges R., *Experience with ICSID*, Ob. Cit., p. 254. "(...) the parties have the opportunity, at the time of consenting to submit disputes to ICSID arbitration, to provide expressly that the Contracting State involved waives immunity from execution in connection with the enforcement of an ICSID award". Sin embargo, esta alternativa sólo será útil en aquellos Estados que condicionen la ejecución a una previa renuncia a la inmunidad. En cambio, no servirá cuando la norma local simplemente prohíba la ejecución basada en intereses domésticos. *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement - International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.9., p. 23. "A waiver of immunity from execution is possible, in principle, but may be subject to specific conditions or limitations under the law of the country where execution is sought". Sobre los posibles efectos de esa renuncia en los Estados Unidos de América, leer a: ORLU NMEHIELLE, Vincent O., *Enforcing Arbitration Awards Under the International Convention for the Settlement of Investment Disputes (ICSID Convention)*, En: *Annual Survey of International & Comparative Law*, Vol. 7, 2001, pp. 38-40.

⁴⁷ *United Nations Conference on Trade and Development, Course on Dispute Settlement - International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Ob. Cit., 2.9., pp. 18-19. "Some national laws require a specific link between the underlying claim and the property that is subject to execution. The United States Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 (FSIA) provides for an exception to state immunity from execution in respect of property in the United States of a foreign State used for commercial activity in the United States if that property is or was used for the commercial activity upon which the claim is based. But it is unlikely that a host State will keep commercial assets in another country that can be said to have a direct connection to an investment in its territory. In addition, it will usually be doubtful whether the host State's underlying activity was commercial. The host State's actions vis-à-vis the investor that led to the dispute are more likely to be official than commercial. Therefore, this provision is unlikely to be helpful in the execution of an ICSID award".

⁴⁸ *Ibidem*, p. 19. "A 1988 amendment to the United States FSIA [1610(a)(6)] has added an important exception to State immunity from execution for purposes of executing arbitral awards. That amendment provides for non-immunity of commercial property of a foreign State if a judgment is based on an order confirming an arbitral award rendered against the foreign State, provided that attachment in aid of execution, or execution, would not be inconsistent with any provision in the arbitral agreement". This provision is an important step towards facilitating the execution of ICSID awards. It allows execution only against property used for a commercial activity in the United States. But it does not require that there is a special nexus between the property and the claim underlying the award. Nor does it require that the underlying transaction, in our case the investment, is of a commercial nature".

Esta misma regla se aplica además en las legislaciones de Inglaterra, Canadá y Australia. Sobre la legislación inglesa, leer a: Jason Fry, *Enforcement of the Award*, documento presentado en la Conference on the Resolution of Disputes under International Construction Contracts, ICC-FIDIC, París, Abril 2004, p. 27.

⁴⁹ En todo caso, como bien indicó una Comisión Ad Hoc en su decisión de 22 de diciembre de 1989 sobre anulación del laudo arbitral en el caso *Martima International Nominees Establishment c. República de Guinea* (Caso ARB/84/4), "[i]t should be clearly understood (...) that State immunity may well afford legal defense to forcible execution, but it provides neither argument nor excuse for failing to comply with an award. In fact, the issue of State immunity from forcible execution of an award will typically arise if the State party refuses to comply with its treaty obligations. Non-compliance by a State constitutes a violation by that State of its international obligations and will attract its own sanctions".

⁵⁰ BROCHES, Aron, "Awards Rendered Pursuant to the ICSID Convention: Binding Force, Finality, Recognition, Enforcement, Execution", Ob. Cit., p. 294. "Refusal by a Contracting State to abide by and comply with an award in accordance with Article 53(1) will expose that State to two types of legal sanctions. The first is the exercise by the investor's national State of its right under customary international law to give diplomatic protection or to bring an international claim (...). The second sanction is a statutory proceeding under Article 64 of the Convention, which provides for the referral to the International Court of Justice of disputes between Contracting States concerning the interpretation or application of the Convention, on the application of any party thereto, unless the States concerned agree to another method of settlement".

diplomática o promover reclamación internacional; y, la segunda, conforme al artículo 64 del Convenio CIADI, ese mismo Estado Miembro podrá iniciar un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia.³¹

Pero, además, como afirma Delaume³², el incumplimiento de un Estado Miembro de su obligación de acatar un laudo arbitral dictado en su contra, necesariamente afectará su credibilidad ante la comunidad internacional y reducirá significativamente su capacidad para atraer nuevas inversiones foráneas³³; potencial riesgo que en la generalidad de los casos será incentivo suficiente para que el Estado cumpla de manera voluntaria.³⁴

Es pues gracias a todos estos potenciales riesgos y costos, que los Estados suelen cumplir voluntariamente con lo dispuesto en un laudo arbitral CIADI³⁵, aunque la experiencia ha demostrado la existencia de algunos problemas.³⁶

Por último, consideramos necesario hacer referencia al artículo 54(2) del Convenio CIADI y a lo que sobre este particular establece la legislación peruana.

El artículo citado dispone que la "(...) parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los territorios de un Estado Contratante deberá presentar, ante los tribunales competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados Contratantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada por el Secretario General. La designación de tales tribunales o autoridades y cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca será notificada por los Estados Contratantes al Secretario General".

³¹ NATHAN, Kathigamar V.S.K., *The Role of the International Centre for Settlement of Investment Disputes in the Development of Rules of International Economic Law*. En: *International Arbitration Law Review*, Vol. 2, No. 3, 1999, p. 91. El autor entiende que, además, el incumplimiento puede afectar las relaciones entre el Estado y el Banco Mundial: "Non-compliance with any international arbitral award can affect relations with the Bank: it goes to the root of the credibility of the defaulting state to honour international commitments, including compliance with the conditions of World Bank loans and credits. Executive directors of the Bank representing foreign investor countries of the Bank can exert considerable pressure on Bank staff to prevent loans and credits from being extended to offending states".

³² DELAUME, Georges R., *ICSID Arbitration Proceedings: Practical Aspects*. En: *Pace Law Review*, Vol. 5, (1985, p. 589. "(...) refusal by the State involved to comply with an ICSID award would deprive it of credibility in the international community. This is not a risk that a State would be likely to assume lightly".

³³ QUIROGA LEÓN, Anibal y TRUJILLO WURTTELE, Mariella, *El Arbitraje Internacional: análisis del Tribunal del CIADI y la legislación peruana*. En: *Derecho, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú*, No. 54, Lima, 2001, p. 385. "(...) por regla general, los Laudos llegan (...) a ser de conocimiento público, y los Estados son conscientes de las efectos negativos de tal publicidad en relación a sus esfuerzos de atracción de la inversión extranjera tan necesaria en sus economías internas".

³⁴ PAULSSON, Jan, *Third World Participation in International Investment Arbitration*. En: *ICSID Review: Foreign Investment Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 1987, p. 54. "As ICSID's Secretary-General has put it 'possibly more important than considerations of a strict legal nature, refusal by the State involved to comply with an ICSID award would deprive it of credibility in the international business community'. SHIHATA, Ibrahim F.I., *Towards a Greater Depoliticization of Investment Disputes: The Roles of ICSID and MIGA*. En: *ICSID Review: Foreign Investment Law Journal*, Vol. 1, 1986, p. 9. "(...) refusal by the State involved to comply with an ICSID award would deprive it of credibility to the international business community. This is not a risk that a State would be likely to assume lightly".

³⁵ QUIROGA LEÓN, Anibal y TRUJILLO WURTTELE, Mariella, *Ob. Cit.*, p. 385. "(...) los Estados custodian por los Tribunales Arbitrales del CIADI al pago de indemnizaciones suelen cumplir con los Laudos (...)"

³⁶ SHIHATA, Ibrahim F.I. y PARRA, Antonio R., *The Experience of the International Centre for Settlement of Investment Disputes*. En: *ICSID Review: Foreign Investment Law Journal*, Vol. 14, No. 2, 1999, p. 344. "In at least one case, the award has gone unpaid owing to civil strife in the country concerned. In several other instances, there have been delays on the part of States to complying with awards".

Sobre el tema ver además a: DELAUME, Georges R., *ICSID Arbitration and the Courts*. En: *American Journal of International Law*, Vol. 77, 1983, pp. 796-802; DELAUME, Georges R., *Experience with ICSID*, *Ob. Cit.*, pp. 250-256; y, SHIHATA, Ibrahim F.I. y PARRA, Antonio R., *The Experience of the International Centre for Settlement of Investment Disputes*, *Ob. Cit.*, pp. 341-343. En estos artículos los autores hacen referencia a ciertos problemas presentados en la ejecución de tres laudos arbitrales CIADI, en los seguidos por S.A.R.L. *Bonnamy & Bonfayre*; República Popular del Congo (Caso ARB/77/2); *Liberian Eastern Timber Corporation*

Si bien la norma bajo estudio no obliga a los Estados Contratantes a designar un tribunal o autoridad, varios Estados sí lo han hecho.³⁷

Es más, muchos países han dictado legislación especial que regula el procedimiento a seguir ante sus cortes nacionales para el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral CIADI.³⁸

El Perú, en cambio, no ha registrado ante el CIADI a autoridad alguna, aun cuando cuenta con la Ley 27775, que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales, publicada el 07 de julio de 2002.

En efecto, nosotros entendemos que esta Ley se aplica al tema que nos convoca, ya que su artículo 1 expresamente dispone lo siguiente: "Declárase de interés nacional el cumplimiento de las sentencias dictadas en los procesos seguidos contra el Estado Peruano por Tribunales Internacionales constituidos por Tratados que han sido ratificados por el Perú de acuerdo con la Constitución Política".

Obviamente un laudo arbitral CIADI ha sido dictado por un Tribunal Internacional constituido por un Tratado ratificado por el Perú de acuerdo con nuestra Constitución vigente.

Sin embargo, luego de identificar que el marco de aplicación de esta Ley claramente comprende a los laudos arbitrales CIADI, y aun cuando respecto de las reglas generales de ejecución no encontramos mayor objeción³⁹, estamos convencidos que al momento en que se

y Letco Lawber Industry Corporation c. República de Liberia (Caso ARB/83/2); y, Société Ovest Africaine des Bâtes Industriels c. Senegal (Caso ARB/82/1), ante cortes francesas y norteamericanas.

³⁷ Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Corea del Sur, Costa de Marfil, Chipre, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos de América, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guinea, Guyana, Holanda, Hungría, Indonesia, Inglaterra, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Latvia, Lesotho, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Portugal, República del África Central, República Checa, República Popular del Congo, Ruanda, Rumanía, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez y Zambia. La lista puede ubicarse en: www.worldbank.org/icsid/pubs/icsid-8/icsid-8-e.htm.

³⁸ Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bélgica, Benín, Botswana, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoros, Corea del Sur, Costa de Marfil, Chipre, Dinamarca, Egipto, El Salvador, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Guinea, Holanda, Honduras, Indonesia, Inglaterra, Irlanda, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Kuwait, Lesotho, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Portugal, República Popular del Congo, Ruanda, Rumanía, Senegal, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Togo, Trinidad y Tobago, Túnez y Zambia. La lista puede ubicarse en: www.worldbank.org/icsid/pubs/icsid-8/icsid-8.htm.

³⁹ "Artículo 2.- Reglas de ejecución de Sentencias Supranacionales

Las sentencias expedidas por los Tribunales Internacionales constituidos según Tratados de los que es parte el Perú, que contengan condena de pago de suma de dinero en concepto de indemnización por daños y perjuicios a cargo del Estado o sean meramente declarativas, se ejecutarán conforme a las reglas de procedimiento siguiente:

a) Competencia.-

La sentencia emitida por el Tribunal Internacional será transcrita por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Presidente de la Corte Suprema, quien la remitirá a la Sala en que se agotó la jurisdicción interna, disponiendo su ejecución por el Juez Especializado o Mixto que conoció el proceso previo. En el caso de no existir proceso interno previo, dispondrá que el Juez Especializado o Mixto competente comunique de la ejecución de la resolución.

b) Procedimiento para la ejecución de resolución que ordena el pago de suma determinada.-

Si la sentencia contiene condena de pago de suma de dinero, el juez a que se refiere el inciso a) de este artículo dispone que se notifique al Ministerio de Justicia para que cumpla con el pago ordenado en la sentencia, en el término de diez días.

(...)

c) Ejecución de medidas provisionales

En los casos que la Corte emita medidas provisionales, ya sea cuando se trate de asuntos que estén en conocimiento de la misma, o bien, a solicitud de la Comisión Interamericana ante la Corte, éstas deberán ser de inmediato cumplimiento, debiendo el Juez Especializado o Mixto ordenar su ejecución dentro del término de 24 horas de recibida la comunicación de la decisión respectiva".

dictó esta Ley no se tuvo en mente regular el procedimiento de ejecución de los laudos arbitrales CIADI, sino únicamente los fallos que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Basta hacer referencia a los artículos 6 y 7 de esta Ley⁶¹, para comprobar nuestra afirmación.

Es más, nos parece claramente discriminatorio que la propia Ley disponga que sólo se mantendrán previsiones presupuestales para honrar los fallos que se emitan en materia de derechos humanos, cuando un laudo arbitral CIADI exige, como hemos visto, el mismo tratamiento.

En todo caso, el marco legal existe y es aplicable no sólo a los laudos arbitrales que se dicten al amparo del Convenio CIADI, sino, además, a aquellos que se emitan conforme a las disposiciones contenidas en los BITs que ha celebrado el Perú.⁶²

No nos queda más que recomendar a nuestros legisladores la pronta adecuación de esta Ley a las obligaciones asumidas dentro del marco del CIADI y de los BITs vigentes.⁶³

**Artículo 4.- Medidas no indemnizatorias*

Dentro del plazo de diez días de recibida la comunicación de la Corte Suprema, el juez que agotó la jurisdicción interna ordenará a los órganos e instituciones estatales concernidas, sean cuáles fueren éstas, el cese de la situación que dio origen a la sentencia referida, indicando la adopción de las medidas necesarias.

En el caso que la sentencia se refiera a resolución judicial, el Juez competente deberá adoptar las disposiciones que resulten pertinentes para la restitución de las cosas al estado en el que se encontraban antes de que se produzca la violación declarada por medio de la sentencia.*

*** Artículo 6.- Comunicación de cumplimiento de sentencias*

La Corte Suprema de Justicia de la República informará, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de las medidas que se hayan adoptado en cumplimiento de la sentencia.*

**Artículo 7.- Previsión presupuestaria*

El Ministerio de Justicia incorporará y mantendrá en su pliego presupuestal una partida que sirva de fondo suficiente para atender exclusivamente el pago de sumas de dinero en concepto de reparación de daños y perjuicios impuesto por sentencias de Tribunales Internacionales en procesos por violación de derechos humanos (...).

⁶¹ CANTUARIAS S., Fernando, *Los tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones y el acceso al arbitraje*, Ob. Cit., pp. 39-50.

⁶² Artículo 49 del Convenio CIADI. *Los Estados Contratantes tomarán las medidas legislativas y de otro orden que sean necesarias para que las disposiciones de este Convenio tengan vigencia en sus territorios.*